

AGENDA CIUDADANA

La Matrioska en la migración indocumentada

Lorenzo Meyer

25 Ago. 11

PROBLEMAS DENTRO DE UN PROBLEMA

Por lo que hace al caso mexicano, es larga la lista de problemas urgentes cuya solución depende de resolver antes otros problemas que los envuelven. La migración indocumentada de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos es muestra de un problema que, en el mejor de los casos, se puede administrar pero no resolver, pues la solución de fondo exige primero desenredar la maraña de complicaciones que lo cubre, producto de intereses muy contradictorios. El mismo razonamiento -para resolver un problema de fondo, antes hay que quitar otros, como en las matrioskas rusas- se puede aplicar también a la endiablada cuestión del narcotráfico, a la deformidad de la estructura social, a la baja calidad de la educación y a un largo etcétera.

Desde esa perspectiva, la política puede ser vista como un proceso de contradicciones y conflictos de intereses concatenados que se puede intentar manejar para no caer en la violencia, pero que difícilmente se puede resolver de raíz sino apenas hacerla tolerable mientras el tiempo saca a algunos de los temas del centro de la agenda para sustituirlos por otros, acaso también irresolubles, pero nuevos. Quizá ese sea el destino de la migración mexicana a Estados Unidos, aunque no faltan catastrofistas como George Friedman, director de un centro de estudios estratégicos (Stratfor), que predicen que el fenómeno se agudizará hasta desembocar en un conflicto violento -una guerra- entre México y Estados Unidos al final del siglo (The next 100 years, 2009).

EL ORIGEN

El flujo de mexicanos hacia el país del norte se inició en el siglo XIX por razones económicas. La construcción de ferrocarriles hacia el norte en el Porfiriato hizo que la propuesta de Sebastián Lerdo de Tejada -"entre la debilidad [mexicana] y la fuerza [norteamericana], el desierto"- dejara de tener sentido. El inicio del siglo XX combinó movilidad de la mano de obra y violencia revolucionaria en México con demanda de trabajadores en Estados Unidos y el fenómeno migratorio dejó de ser algo marginal. La Segunda Guerra Mundial y el Programa Bracero de 1942 institucionalizaron el flujo legal de trabajadores mexicanos a la agricultura y al tendido de vías férreas en Estados Unidos, pero también originó un flujo de trabajadores "sin papeles". Cuando en 1964 se dejó expirar el acuerdo de braceros, ese movimiento de trabajadores indocumentados continuó y, con altas y bajas, se mantiene.

¿Cuántos mexicanos se encuentran sin documentos en el mercado laboral norteamericano? Obviamente no hay un censo, pero un informe publicado este mes por el Immigration Policy Center del American Immigration Council, de Washington, señala que el 55% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos son ilegales y que de todos los indocumentados en ese país el 59% son mexicanos. Si se supone que hay entre 11 y 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, entonces los mexicanos de esa condición rondan entre los 6.5 y 7 millones.

La migración de mexicanos hacia el norte se aceleró en tiempos recientes, pero en los últimos años la desaceleración de la economía norteamericana y el aumento en las medidas para impedir el ingreso de ilegales ("Patrulla Fronteriza", muro, deportaciones), más las actitudes de una buena parte del público norteamericano que exige su expulsión -el caso más conocido es Arizona- han reducido notablemente el número de mexicanos que buscan ingresar sin documentos a Estados Unidos. Por otro lado y por las mismas razones, también ha disminuido el número de mexicanos que retornan voluntariamente a su país. El viejo ciclo de migrar al norte, regresar a casa con ahorros, volver a partir y volver a retornar, se está secando: para quien no tiene visa es caro y muy arriesgado intentar un regreso temporal a México; es

preferible quedarse allí incluso si el trabajo es escaso, la persecución se agudiza y la separación familiar se prolonga.

Poco puede hacer México por sus trabajadores indocumentados en Estados Unidos, pero Estados Unidos tampoco parece dispuesto a confrontar realmente el problema, pues se mueve entre el rechazo a los indocumentados ("violadores de la ley") y la necesidad de retenerlos pero sin cambiar su estatus irregular. Y es que por un lado la economía norteamericana está mal; las cifras oficiales ponen en 13.9 millones a los desempleados. Por ello, y para personajes como la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, o el sheriff del condado de Maricopa en ese estado, Joe Arpaio, adoptar una actitud dura contra los indocumentados significa una ganancia política; Brewer, Arpaio y muchos otros niegan que su motivación sea racista sino una actitud legítima para evitar que los indocumentados le quiten empleo a los ciudadanos norteamericanos y sean una carga para el erario. Sin embargo, la realidad es que los norteamericanos desempleados no desean ocupar el lugar de los deportados (un millón en la administración de Obama).

LAS CONTRADICCIONES

En una sección de The New York Times, titulada Room for Debate, del 18 de agosto, varios conocedores discuten la viabilidad de una medida que se estudia en el Congreso en Washington: una que obligaría a todos los empleadores en empresas agrícolas a verificar la autenticidad de los documentos de sus trabajadores y dejar sin trabajo a los indocumentados. Philip Martin, un economista de California, asegura que si se pagara a los trabajadores agrícolas el sueldo normal y no el muy bajo que realmente reciben los indocumentados, el costo promedio para el consumidor norteamericano de frutas y verduras aumentaría apenas 15 dólares al año, es decir, el costo de dos entradas al cine. Visto así, prescindir de los indocumentados debiera ser fácil.

Sin embargo, Tamar Jacoby, presidenta de una organización de pequeños empresarios, dice que ese argumento es irrelevante: los indocumentados son importantes no por lo bajo de su salario sino porque son los únicos trabajadores de los que disponen los agricultores. Ni el aumento del sueldo ni la mejora en las condiciones de trabajo harían que los desempleados norteamericanos regresaran a las labores agrícolas intensivas en mano de obra. Y si nadie levanta las cosechas, la vida en las granjas se vendría abajo, pero como por cada empleo directo en ellas sostiene otros tres o cuatro en la escala inmediata superior -vendedores de maquinaria y fertilizantes, procesadores de alimentos, transportistas, etcétera- y esos empleos, menos duros y mejor pagados, ya los ocupan norteamericanos. Echar fuera a los indocumentados no mejoraría la situación de desempleo en Estados Unidos, la empeoraría. Lisa García Bedolla, de la Universidad de California, en Berkeley, reafirma este punto con un caso empírico: en Georgia se endureció la política contra indocumentados, faltaron trabajadores en los campos y para subsanar el problema se exigió a personas en libertad bajo palabra, norteamericanos, que se presentaran a ocupar las vacantes: los así forzados desertaron de inmediato, aduciendo "lo intolerable" de las condiciones de trabajo.

Transformar las actividades agrícolas intensivas en mano de obra en actividades mecanizadas va a tomar tiempo en Estados Unidos. Por eso, señala Michael J. Roberts, profesor de la North Carolina State University, si finalmente el Congreso en Washington pasa una legislación que obligue a los granjeros a verificar los documentos de sus trabajadores, esa legislación le ganará apoyo a los legisladores, pero con toda seguridad va a contener loopholes, es decir, cláusulas que permitan a granjeros e indocumentados darle la vuelta al objetivo de la ley, pues por ahora el campo norteamericano no puede darse el lujo de prescindir de los indocumentados. Y lo que pasa en el campo también sucede en otras actividades mal pagadas y sin prestigio en la vida urbana del vecino del norte.

EN SUMA

Todo indica que los empleadores que los necesitan seguirán contratando a los indocumentados, pues si socialmente son "indeseables", económicamente son insustituibles. En el futuro inmediato no se prevé que se acelere el otorgamiento rápido de visas de trabajo para los que quieren emigrar ni que se adoptará una legislación que legalice a los ilegales ni tampoco una que realmente los impida; todo seguirá irregular pues el prejuicio del votante - para explicarlo hay que recurrir al estudio de las mentalidades- se contrapone a la necesidad del empleador y los políticos no resuelven la contradicción. Con leyes como las de Arizona o redadas para capturarlos a los "sin papeles", la vida del indocumentado se hará aún más difícil pero el problema persistirá.